



Boletín mensual

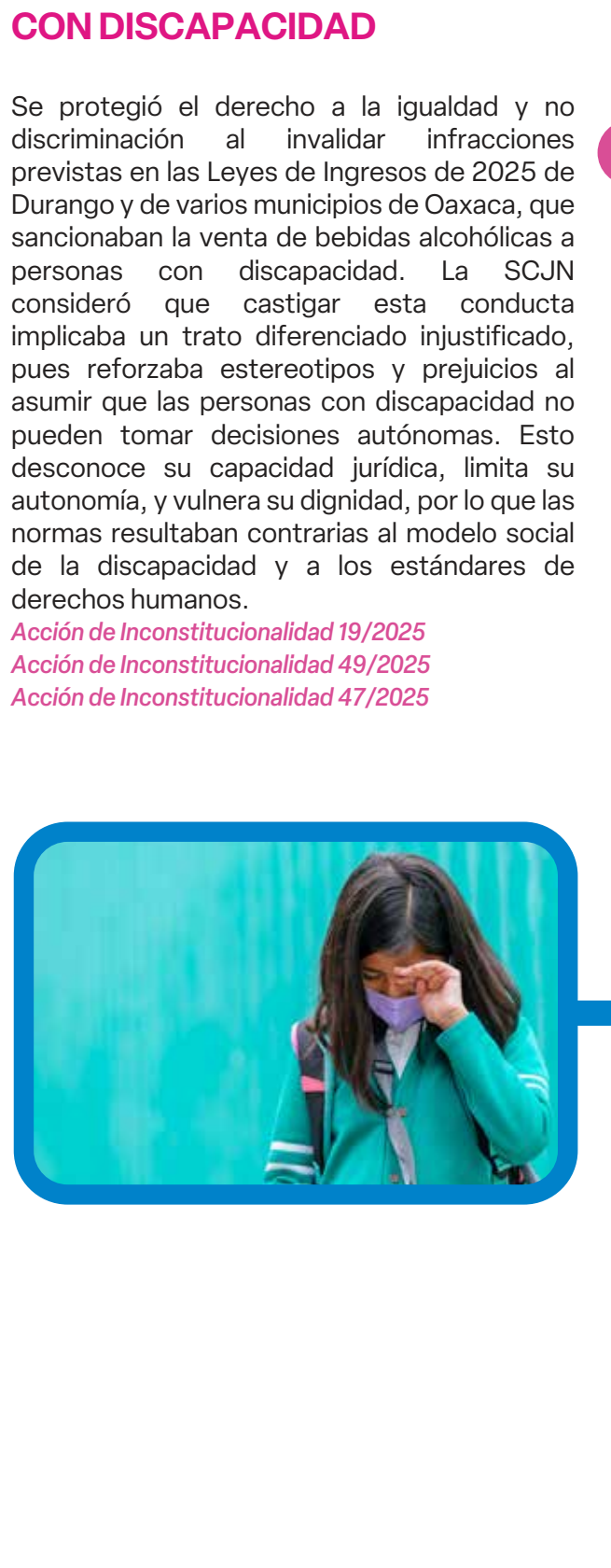
de Resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Diciembre 2025

¿Qué resolvió la Suprema Corte en el último mes?

Durante diciembre de 2025, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró siete sesiones antes del inicio del segundo periodo de receso, en las que **resolvió 174 asuntos**. En ese tiempo se fortaleció la protección de los derechos humanos, la seguridad jurídica y la certeza en materias como la fiscal, penal, administrativa, laboral, municipal, energética y de regulación económica.

Este boletín ofrece un resumen de los **56 asuntos** más relevantes. ¡Consulta los principales fallos y mantente informado sobre las decisiones que impactarán la vida legal y social de México!



DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se protegió el derecho a la igualdad y no discriminación al invalidar infracciones previstas en las Leyes de Ingresos de 2025 de Durango y de varios municipios de Oaxaca, que sancionaban la venta de bebidas alcohólicas a personas con discapacidad. La SCJN consideró que castigar esta conducta implicaba un trato diferenciado injustificado, pues reforzaba estereotipos y prejuicios al asumir que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones autónomas. Esto desconoce su capacidad, autonomía y vulnera su dignidad, por lo que las normas resultaban contrarias al modelo social de la discapacidad y a los estándares de derechos humanos.

Acción de Inconstitucionalidad 19/2025

Acción de Inconstitucionalidad 47/2025

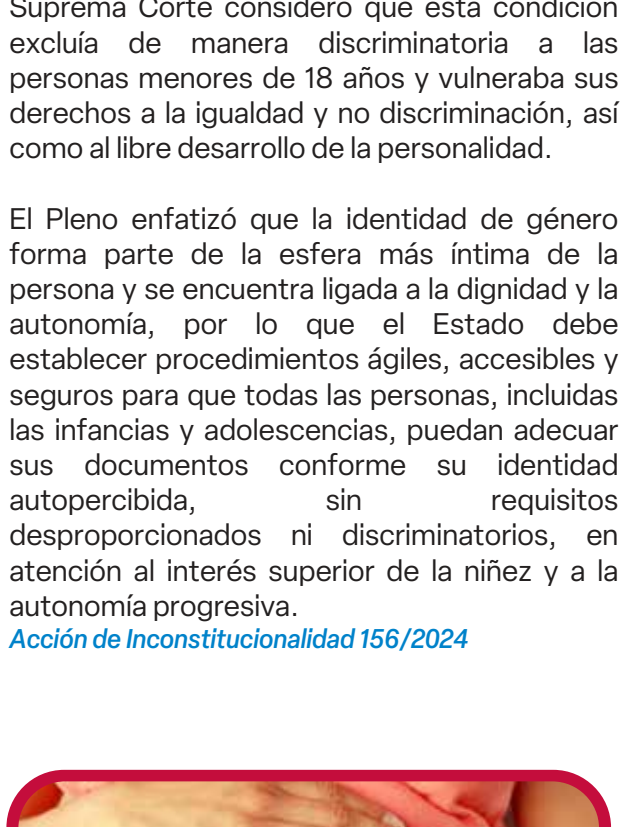


DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Con el objetivo de garantizar que las personas mayores que viven en albergues privados reciban un cuidado diligente, digno y con enfoque de derechos humanos durante emergencias sanitarias, la SCJN analizó el caso de un hijo que demandó por daño moral a un albergue donde residía su madre, persona mayor que se contagió de COVID-19 y posteriormente falleció.

El Pleno concluyó que el establecimiento no incurrió en negligencia, sino que el albergue cumplió con diversas obligaciones: (1) habilitar un área de aislamiento temporal; (2) seguir las indicaciones del médico de la residente; (3) monitorear sus signos vitales y (4) mantener informada a la familia sobre la evolución del estado de salud. La Suprema Corte sostuvo que acondicionar un piso de aislamiento para personas contagiadas no fue un acto inhumano ni contrario a la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, sino una medida sanitaria razonable y proporcional, orientada a salvaguardar el derecho a la salud, la vida y la integridad personal, así como a prevenir riesgos para la comunidad residente, sin afectar la dignidad de las personas mayores.

Amparo Directo 23/2025



DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Se consolidó un estándar más protector para acreditar el acoso escolar al reconocer que el acoso escolar (bullying) puede manifestarse como una serie de agresiones físicas, psicomocionales, patrimoniales o sexuales que pueden parecer hechos aislados, pero que, en conjunto, configuran un patrón de hostigamiento en el entorno escolar. En el caso analizado, la SCJN consideró que las burlas, maltratos y agresiones sufridas por un niño si configuraban acoso escolar y revocó la sentencia que había exigido probar la intención de las personas agresoras, al estimar que basta la existencia de indicios y que el daño se produce con independencia de esa intención.

En consecuencia, el Pleno ordenó al tribunal resolver de nueva cuenta el amparo directo aplicando un estándar en el que se valoren de manera conjunta todos los episodios de violencia sin fragmentarlos, se prescinda de la intención de la parte agresora como requisito para acreditar bullying y se verifique con un umbral probatorio razonable, si existe un patrón de hostigamiento, todo ello con perspectiva de infancia y privilegiando el interés superior de la niñez, con el fin de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia y a un entorno escolar seguro.

Amparo Directo en Revisión 3406/2024

DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSONAS LGBTQI+

La SCJN garantizó el derecho a la salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes en Tlaxcala al invalidar normas de la Ley de Salud y del Código Penal que imponían barreras indebidas para acceder a servicios médicos, incluida la interrupción legal del embarazo.

En ese contexto, el Pleno determinó que no puede condicionarse la atención médica a víctimas de violencia familiar o sexual al inicio de una investigación o proceso, ni exigir autorización del Ministerio Público para interrumpir el embarazo en los casos permitidos por la ley, pues ello desconoce la urgencia de la atención, agrava las cargas para las víctimas y vulnera su autonomía y derecho a decidir. Asimismo, se declaró inconstitucional exigir el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o representación legal para que niñas y adolescentes accedan a la anticoncepción de emergencia, al considerar que esa exigencia constituye una barrera desproporcionada para sus derechos reproductivos y puede disuadirles de buscar atención oportuna afectando su salud, lo que resulta efectivo a servicios de salud, sin dejar de lado que las instituciones deben informar a las autoridades de protección cuando se trate de violencia.

Finalmente, al tratarse de un mismo sistema normativo, el Pleno invalidó los preceptos penales que criminalizaban de manera absoluta la interrupción del embarazo y ajustó la regulación de la objeción de conciencia, reiterando que el acceso al aborto en los supuestos permitidos es parte esencial de la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes.

Acción de Inconstitucionalidad 89/2024

Se aseguró la obligación de juzgar con perspectiva de género en los casos penales que involucran a mujeres. De forma específica, el Pleno anuló la condena por secuestro agravado imputada a una mujer que aparentemente realizaba labores de cuidado respecto de la víctima y advirtió que el tribunal no exploró adecuadamente si la sentencia actuó en un contexto de violencia, subordinación o vulnerabilidad por razón de género ni aplicó la metodología prevista en la jurisprudencia y en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, por lo que ordenó emitir una nueva decisión.

Por ello, la Corte instruyó reexaminar las pruebas para identificar posibles relaciones de poder, violencia o discriminación que pudieran haber condicionado la conducta de la víctima, en su caso, recabar de oficio elementos adicionales como peritajes psicológicos o psicosociales y testimonios. Con ello, se busca esclarecer si los hechos ocurrieron en un contexto de desventaja estructural o de violencia de género que incida en la responsabilidad penal, garantizando a las mujeres el derecho a la igualdad, a vivir libres de violencia y a un acceso a la justicia sin estereotipos, evitando perjuicios en la valoración de los hechos y pruebas.

Amparo Directo en Revisión 5248/2023

Se garantizó el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTQI+, al declarar inválida la porción normativa "el homosexualismo" del artículo 192 del Código Penal de Tamaulipas que consideraba a la orientación sexual como parte del delito de "corrupción de menores e incapaces". El Pleno consideró que dicha inclusión partía de estereotipos, en los que se piensa que la orientación sexual representa un riesgo para las infancias o para las personas con discapacidad, lo que vulnera diversos derechos, entre ellos, al libre desarrollo de la personalidad y el principio de taxatividad penal.

El Pleno determinó que la orientación sexual es un aspecto inherente de la identidad y la vida privada de cada persona, ligado a su autonomía y proyecto de vida, por lo que no puede equipararse a prácticas corruptoras ni ser objeto de castigo penal. Al eliminar esta referencia del delito, la Corte afirmó que la protección de niñas, niños y adolescentes debe darse sin recurrir a prejuicios que criminalizan a las personas homosexuales o bisexuales, y advirtió que otras normas que equiparan la homosexualidad con situaciones como el alcoholismo reproducen el mismo enfoque discriminatorio e incompatible con la igualdad, al reforzar estigmas y exclusión social.

Acción de Inconstitucionalidad 86/2024

Se garantizó que las personas puedan ejercer su libertad religiosa sin perder el acceso a documentos de identidad, al ordenar que se permita el uso del hiyal, u otras indumentarias religiosas que no cubran el rostro en la fotografía del pasaporte. La SCJN anuló los casos de dos mujeres de Chiuhahua y Ciudad de México, a quienes se les negó o condicionó el trámite de pasaporte hasta que las cubrieran el velo islámico, pese a que esta prenda solo cubre la cabeza y permite su plena identificación.

El Pleno conduyó que la afectación a su libertad religiosa y al derecho a no ser discriminados no derivó automáticamente del artículo 14, fracción IV, del Reglamento de Pasaportes, sino de una interpretación rígida de la exigencia de "cabeza descubierta", aplicada sin excepciones incluso cuando la prenda religiosa no cubría el rostro. Bajo el nuevo criterio, la regla general de fotografía con la cabeza descubierta se mantiene, pero debe aplicarse de forma que, de manera excepcional, cuando una persona manifieste que debe portar una prenda o indumentaria religiosa que no le impida su adecuada identificación —como el hiyal— se le permita aparecer con ella en la foto del pasaporte, siempre que cumpla con los demás requisitos legales.

Amparo en Revisión 499/2024

Amparo en Revisión 418/2025



DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO

Se consolidó la protección de la sociedad frente a delitos especialmente graves al determinar que las personas legisladoras pueden definir y restringir los beneficios puerberacionales con criterios objetivos, razonables y constitucionalmente válidos. En este caso, la SCJN consideró válida la limitación contenida en la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que niega esos beneficios a quienes han sido sentenciados por secuestro, en cualquiera de sus modalidades, al estimar que vulnerar los derechos a la reinserción social, a la igualdad ni el principio de irretroactividad, sino que se busca dar un tratamiento más riguroso a conductas de alto impacto social y contribuir a la paz y la seguridad pública.

Amparo en Revisión 156/2025

Se fortaleció la seguridad patrimonial de quienes utilizan servicios bancarios al confirmar la constitucionalidad del delito que sanciona a quien, de forma indebida, utilice, obtenga, transfiera o permita el uso de valores de las personas usuarias de instituciones de crédito. La SCJN sostuvo que este tipo penal debe interpretarse de manera sistemática junto con la normativa que regula los deberes y obligaciones de las instituciones bancarias, lo que permite identificar con claridad las conductas prohibidas, respeta el principio de taxatividad y brinda certeza en su aplicación. Con esta decisión, se refuerza la protección penal frente al uso fraudulento o contrario a las buenas prácticas de los recursos de la clientela bancaria, al reconocer que dichas conductas pueden y deben ser sancionadas para salvaguardar el patrimonio de las personas usuarias.

Amparo Directo en Revisión 2212/2025

Se garantizó la legalidad de los delitos que sancionan actos de corrupción al confirmar la validez del precepto del Código Penal del Estado de México que castiga a las personas servidoras públicas que solicitan u obtienen dádivas a cambio de rifas, permitiendo omitir los vínculos con sus funciones. La SCJN concluyó que la norma describe con claridad las conductas prohibidas y las penas aplicables, de modo que no deja espacios para decisiones discrecionales o arbitrarias. Con esto se fortaleció la protección de la ciudadanía frente a prácticas como pedir o recibir dinero, bienes o beneficios a cambio de favores oficiales, al reconocer que estas conductas están tipificadas de manera precisa y pueden ser sancionadas penalmente conforme al principio de legalidad.

Amparo Directo en Revisión 1122/2025

Se protegió el derecho de acceso a la justicia de una persona trabajadora al considerar inconstitucional que el tribunal laboral tuviera por no presentada su demanda solo porque no atendió una incapacidad relacionada con la supuesta "prevención técnica" de sus apoderados, en lugar de admitirla y subsanar oficiosamente las irregularidades. El Pleno afirmó que, conforme a los artículos 685, 672 y 673 de la Ley Federal del Trabajo y al artículo 17 constitucional, los órganos laborales deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, aplicar el principio pro persona trabajadora, garantizar un recurso efectivo y suplir la queja, por lo que revocó la sentencia del tribunal colegiado y le devolvió el asunto para que, con esa interpretación, continúe el estudio de los temas de legalidad y del fondo del caso, bajo un enfoque de tutela judicial efectiva.

Amparo Directo en Revisión 3124/2025

REGULACIÓN ECONÓMICA Y COBROS INDEBIDOS

Se confirmó la facultad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de cancelar la inscripción de los valores en el Registro Nacional en la materia cuando se salvaguarden los intereses del público inversionista y se cumplan los requisitos legales, conforme al artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores.

El Pleno consideró que la norma define claramente los supuestos y procedimientos de cancelación, lo que limita la actuación de la autoridad mediante la obligación de fundar y motivar sus resoluciones. En el caso concreto, una sociedad emisora en proceso de liquidación reclamó que no se previera esta situación como causa de cancelación, pero la Corte negó el amparo al estimar que las personas legisladoras gozan de libertad de configuración para fijar las causales de cancelación dentro de una relación privada regida por el principio de autonomía de la voluntad y la liquidación de las sociedades emisoras como supuesto adicional.

Amparo en Revisión 246/2025

El Alto Tribunal reforzó la protección frente a cobros indebidos al invalidar diversas disposiciones municipales y estatales que imponían derechos, tarifas o cuotas sobre actividades vinculadas con hidrocarburos y electricidad sin sustento constitucional. El Pleno reiteró que la regulación, supervisión y establecimiento de contribuciones en el sector energético son facultades exclusivas de la Federación, al tratarse de áreas estratégicas reservadas a la Nación. En ese sentido, se anuló cobros previstos en leyes de ingresos de diversos municipios por razones de fondo dentro de una relación pública de servicios, con actividades relacionadas con actividades energéticas y de hidrocarburos, así como pagos por derechos para perforaciones de pozos, al estimarse que invadían competencias del Congreso de la Unión.

Contraversia Constitucional 68/2025

Contraversia Constitucional 95/2025

Contraversia Constitucional 105/2025

Contraversia Constitucional 99/2025

Contraversia Constitucional 109/2025

Contraversia Constitucional 118/2025

Contraversia Constitucional 127/2025

Contraversia Constitucional 124/2025

Contraversia Constitucional 29/2025

Contraversia Constitucional 115/2025

Contraversia Constitucional 31/2025

Contraversia Constitucional 122/2025

Contraversia Constitucional 131/2025

Contraversia Constitucional 36/2025

Contraversia Constitucional 59/2025

Se reforzó la protección de las personas frente a sanciones discrecionales al invalidar diversas disposiciones de leyes de ingresos estatales y municipales que imponían cuotas desproporcionadas por servicios públicos, trámites administrativos y servicios del Poder Judicial, así como multas ambiguas por conductas como "faltas a la moral", "escándalo en vía pública" o realizar juegos de azar. También declaró inconstitucionales esquemas de cobro de alumbrado público y de agua potable que no se basaban en el costo real del servicio, así como tarifas diferenciadas para personas trabajadoras sexuales para acceder a certificados médicos, al considerar que esos modelos vulneraban los derechos a la igualdad, a la no discriminación, al acceso a la salud y los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y seguridad jurídica. En todos los casos, la Corte exhortó a congresos y ayuntamientos a no reproducir estos vicios y a diseñar esquemas de cobro razonables, sin fines recaudatorios indebidos y con enfoque de derechos humanos.

Acción de Inconstitucionalidad 49/2025

Acción de Inconstitucionalidad 186/2024

Acción de Inconstitucionalidad 16/2025

Acción de Inconstitucionalidad 3/2025

Acción de Inconstitucionalidad 34/2025

Acción de Inconstitucionalidad 56/2025

Acción de Inconstitucionalidad 53/2025

Acción de Inconstitucionalidad 39/2025

Acción de Inconstitucionalidad 40/2025

Acción de Inconstitucionalidad 25/2025

Se protegió la seguridad jurídica y el principio de legalidad al invalidar la obligación de la contribución prevista en la Ley de Ingresos 2025 de Puerto Vallarta que obligaba a las personas extranjeras a pagar 1.25 UMAS por ingresar al municipio. La SCJN consideró que el cobro era ambiguo porque no precisaba qué servicios, bienes o espacios públicos justificaban la cuota ni guardaba una relación clara con su costo real, lo que generaba incertidumbre y abría la puerta a decisiones arbitrarias de la autoridad municipal.

Acción de Inconstitucionalidad 41/2025

FACULTADES MUNICIPALES

Se fortaleció el marco jurídico para la prestación del servicio de agua en Reynosa, Tamaulipas, al confirmar la validez del Decreto que reformó la Ley de Aguas estatal, así como de los Decretos de creación de los organismos operadores municipales en la materia. El Pleno concluyó que el Congreso local siguió un procedimiento legislativo conforme a la Constitución Política Federal y a su ley interna, y avaló el nuevo diseño del organismo operador de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, que incorpora la participación de los sectores social y privado y se ajusta al marco estatal vigente. Con esta decisión, se consolidó un esquema que respeta la coordinación municipal del servicio y refuerza la coordinación institucional para garantizar de mejor manera el derecho humano al agua en el municipio.

Contraversia Constitucional 275/2024

Se reforzó que la suspensión de ayuntamientos solo puede utilizarse como medida excepcional, sujeta a reglas claras, plazos definidos y pleno respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. En ese sentido, la SCJN declaró la invalidez del artículo 59, primer párrafo, de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, al considerar que al distinguir con claridad entre suspensión y desaparición de ayuntamientos, no se estableció un plazo para la suspensión ni se garantizaba adecuadamente el derecho de audiencia del municipio. Por ello, también invalidó el dictamen y el Decreto 004 que suspendió al Ayuntamiento Indígena de San Martín Itunyoso para el periodo 2023-2025, al estimar que la medida no cumplía con estándares constitucionales de excepcionalidad y control.

El Pleno precisó que, cuando se declare la desaparición de un ayuntamiento, el Congreso local debe designar un Concejo Municipal integrado por vecinas y vecinos del propio municipio, por lo que es inconstitucional que se deje en manos exclusivas del Poder Ejecutivo esa decisión en estos casos. En cambio, consideró válida que, ante la suspensión de un ayuntamiento, se nombre temporalmente a una persona encargada de la administración municipal, siempre que se respeten los límites constitucionales y se asegure la continuidad de los servicios públicos para la población.

Contraversia Constitucional 533/2023

SEGURIDAD JURÍDICA

Se brindó certeza sobre los medios de defensa frente al bloqueo, suspensión o limitación de cuentas bancarias al establecer, con carácter de jurisprudencia, que éstas operaciones realizadas por los bancos con base en las cláusulas contractuales no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. El Máximo Tribunal precisó que, en esos casos, la institución de crédito no ejerce funciones públicas ni poderes estatales, sino que actúa dentro de una relación privada regulada por el contrato, por lo que cualquier inconformidad debe llevarse a cabo en la vía mercantil, delimitando así con claridad la competencia del amparo y la de los tribunales civiles y comerciales.

Contradicción de Criterios 201/2025

Para fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, la SCJN confirmó la sentencia que negó el amparo a una empresa de explotación constitucional del Decreto de 8 de mayo de 2023 que reformó la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y otras leyes ambientales en materia de concesiones para minería y agua. El Pleno concluyó que los artículos impugnados no afectan directamente a la quejosa o queja, en su caso, requirían un acto de aplicación.

Además, la empresa no podía reclamar la falta de consulta a pueblos indígenas ni la supuesta invasión de competencias municipales, al no contar con legitimación para hacerlo, y tal vez en el futuro, cuando se realicen estudios de impacto ambiental, por lo que no resultaba procedente un análisis de fondo más amplio. De igual forma, el Pleno determinó que el Congreso de la Unión puede redefinir la regulación del sector minero e hídrico y ajustar las cláusulas regulatorias de las concesiones en función del interés público, sin vulnerar el principio de irretroactividad ni afectar derechos adquiridos condicionados.

Amparo en Revisión 4685/2024

La SCJN reconoció la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que ordena reservar la identidad y datos personales de las personas dentro de una relación privada regida por el contrato, por lo que cualquier inconformidad debe llevarse a cabo en la vía mercantil, delimitando así con claridad la competencia del amparo y la de los tribunales civiles y comerciales.

Contradicción de Criterios 201/2025

Para fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, la SCJN confirmó la sentencia que negó el amparo a una empresa de explotación constitucional del Decreto de 8 de mayo de 2023 que reformó la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y otras leyes ambientales en materia de concesiones para minería y agua. El Pleno concluyó que los artículos impugnados no afectan directamente a la quejosa o queja, en su caso, requirían un acto de aplicación.

Además, la empresa no podía reclamar la falta de consulta a pueblos indígenas ni la supuesta invasión de competencias municipales, al no contar con legitimación para hacerlo, y tal vez en el futuro, cuando se realicen estudios de impacto ambiental, por lo que no resultaba procedente un análisis de fondo más amplio. De igual forma, el Pleno determinó que el Congreso de la Unión puede redefinir la regulación del sector minero e hídrico y ajustar las cláusulas regulatorias de las concesiones en función del interés público, sin vulnerar el principio de irretroactividad ni afectar derechos adquiridos condicionados.

Amparo en Revisión 4685/2024

La SCJN reconoció la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que ordena reservar la identidad y datos personales de las personas dentro de una relación privada regida por el contrato, por lo que cualquier inconformidad debe llevarse a cabo en la vía mercantil, delimitando así con claridad la competencia del amparo y la de los tribunales civiles y comerciales.

Contradicción de Criterios 201/2025

Para fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, la SCJN confirmó la sentencia que negó el amparo a una empresa de explotación constitucional del Decreto de 8 de mayo de 2023 que reformó la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y otras leyes ambientales en materia de concesiones para minería y agua. El Pleno concluyó que los artículos impugnados no afectan directamente a la quejosa o queja, en su caso, requirían un acto de aplicación.

Además, la empresa no podía reclamar la falta de consulta a pueblos indígenas ni la supuesta invasión de competencias municipales, al no contar con legitimación para hacerlo, y tal vez en el futuro, cuando se realicen estudios de impacto ambiental, por lo que no resultaba procedente un análisis de fondo más amplio. De igual forma, el Pleno determinó que el Congreso de la Unión puede redefinir la regulación del sector minero e hídrico y ajustar las cláusulas regulatorias de las concesiones en función del interés público, sin vulnerar el principio de irretroactividad ni afectar derechos adquiridos condicionados.

Amparo en Revisión 4685/2024

La SCJN reconoció la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que ordena reservar la identidad y datos personales de las personas dentro de una relación privada regida por el contrato, por lo que cualquier inconformidad debe llevarse a cabo en la vía mercantil, delimitando así con claridad la competencia del amparo y la de los tribunales civiles y comerciales.

Contradicción de Criterios 201/2025

Para fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, la SCJN confirmó la sentencia que negó el amparo a una empresa de explotación constitucional del Decreto de 8 de mayo de 2023 que reformó la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y otras leyes ambientales en materia de concesiones para minería y agua. El Pleno concluyó que los artículos impugnados no afectan directamente a la quejosa o queja, en su caso, requirían un acto de aplicación.

Además, la empresa no podía reclamar la falta de consulta a pueblos indígenas ni la supuesta invasión de competencias municipales, al no contar con legitimación para hacerlo, y tal vez en el futuro, cuando se realicen estudios de impacto ambiental, por lo que no resultaba procedente un análisis de fondo más amplio. De igual forma, el Pleno determinó que el Congreso de la Unión puede redefinir la regulación del sector minero e hídrico y ajustar las cláusulas regulatorias de las concesiones en función del interés público, sin vulnerar el principio de irretroactividad ni afectar derechos adquiridos condicionados.

Amparo en Revisión 4685/2024

La SCJN reconoció la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que ordena reservar la identidad y datos personales de las personas dentro de una relación privada regida por el contrato, por lo que cualquier inconformidad debe llevarse a cabo en la vía mercantil, delimitando así con claridad la competencia del amparo y la de los tribunales civiles y comerciales.

Contradicción de Criterios 201/2025

Para fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, la SCJN confirmó la sentencia que negó el amparo a una empresa de explotación constitucional del Decreto de 8 de mayo de 2023 que reformó la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y otras leyes ambientales en materia de concesiones para minería y agua. El Pleno concluyó que los artículos impugnados no afectan directamente a la quejosa o queja, en su caso, requirían un acto de aplicación.

Además, la empresa no podía reclamar la falta de consulta a pueblos indígenas ni la supuesta invasión de competencias municipales, al no contar con legitimación para hacerlo, y tal vez en el futuro, cuando se realicen estudios de impacto ambiental, por lo que no resultaba procedente un análisis de fondo más amplio. De igual forma, el Pleno determinó que el Congreso de la Unión puede redefinir la regulación del sector minero e hídrico y ajustar las cláusulas regulatorias de las concesiones en función del interés público, sin vulnerar el principio de irretroactividad ni afectar derechos adquiridos condicionados.

Amparo en Revisión 4685/2024

La SCJN reconoció la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que ordena reservar la identidad y datos personales de las personas dentro de una relación privada regida por el contrato, por lo que cualquier inconformidad debe llevarse a cabo en la vía mercantil, delimitando así con claridad la competencia del amparo y la de los tribunales civiles y comerciales.

Contradicción de Criterios 201/2025

Para fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, la SCJN confirmó la sentencia que negó el amparo a una empresa de explotación constitucional del Decreto de 8 de mayo de 2023 que reformó la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y otras leyes ambientales en materia de concesiones para minería y agua. El Pleno concluyó que los artículos impugnados no afectan directamente a la quejosa o queja, en su caso, requirían un acto de aplicación.

Además, la empresa no podía reclamar la falta de consulta a pueblos indígenas ni la supuesta invasión de competencias municipales, al no contar con legitimación para hacerlo, y tal vez en el futuro, cuando se realicen estudios de impacto ambiental, por lo que no resultaba procedente un análisis de fondo más amplio. De igual forma, el Pleno determinó que el Congreso de la Unión puede redefinir la regulación del sector minero e hídrico y ajustar las cláusulas regulatorias de las concesiones en función del interés público, sin vulnerar el principio de irretroactividad ni afectar derechos adquiridos condicionados.

Amparo en Revisión 4685/2024

La SCJN reconoció la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que ordena reservar la identidad y datos personales de las personas dentro de una relación privada regida por el contrato, por lo que cualquier inconformidad debe llevarse a cabo en la vía mercantil, delimitando así con claridad la competencia del amparo y la de los tribunales civiles y comerciales.

Contradicción de Criterios 201/2025

Para fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, la SCJN confirmó la sentencia que negó el amparo a una empresa de explotación constitucional del Decreto de 8 de mayo de 2023 que reformó la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y otras leyes ambientales en materia de concesiones para minería y agua. El Pleno concluyó que los artículos impugnados no afectan directamente a la quejosa o queja, en su caso, requirían un acto de aplicación.

Además, la empresa no podía reclamar la falta de consulta a pueblos indígenas ni la supuesta invasión de competencias municipales, al no contar con legitimación para hacerlo, y tal vez en el futuro, cuando se realicen estudios de impacto ambiental, por lo que no resultaba procedente un análisis de fondo más amplio. De igual forma, el Pleno determinó que el Congreso de la Unión puede redefinir la regulación del sector minero e hídrico y ajustar las cláusulas regulatorias de las concesiones en función del interés público, sin vulnerar el principio de irretroactividad ni afectar derechos adquiridos condicionados.

Amparo en Revisión 4685/2024

La SCJN reconoció la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que ordena reservar la identidad y datos personales de las personas dentro de una relación privada regida por el contrato, por lo que cualquier inconformidad debe llevarse a cabo en la vía mercantil, delimitando así con claridad la competencia del amparo y la de los tribunales civiles y comerciales.

Contradicción de Criterios 201/2025

Para fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, la SCJN confirmó la sentencia que negó el amparo a una empresa de explotación constitucional del Decreto de 8 de mayo de 2023 que reformó la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y otras leyes ambientales en materia de concesiones para minería y agua. El Pleno concluyó que los artículos impugnados no afectan directamente a la quejosa o queja, en su caso, requirían un acto de aplicación.

Además, la empresa no podía reclamar la falta de consulta a pueblos indígenas ni la supuesta invasión de competencias municipales, al no contar con legitimación para hacerlo, y tal vez en el futuro, cuando se realicen estudios de impacto ambiental, por lo que no resultaba procedente un análisis de fondo más amplio. De igual forma, el Pleno determinó que el Congreso de la Unión puede redefinir la regulación del sector minero e hídrico y ajustar las cláusulas regulatorias de las concesiones en función del interés público, sin vulnerar el principio de irretroactividad ni afectar derechos adquiridos condicionados.

Amparo en Revisión 4685/2024

La SCJN reconoció la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que ordena reservar la identidad y datos personales de las personas dentro de una relación privada regida por el contrato, por lo que cualquier inconformidad debe llevarse a cabo en la vía mercantil, delimitando así con claridad la competencia del amparo y la de los tribunales civiles y comerciales.

Contradicción de Criterios 201/2025

Para fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, la SCJN